



Güçlü bireyler.
Güçlü toplumlar.

REPÚBLICA DE TURQUÍA
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

DECLARACIÓN DE ESTAMBUL
SOBRE LA TRANSPARENCIA JUDICIAL
Y
LAS MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA
DE LA DECLARACIÓN DE ESTAMBUL



Ankara, 2023

“PROYECTO DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CONFIANZA DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN”

Este libro ha sido preparado y publicado en el marco del “Proyecto de Ética, Transparencia y Confianza del Tribunal de Casación” financiado por la Presidencia del Tribunal de Casación y ejecutado por la Presidencia del Tribunal de Casación y la PNUD.

Preparado para publicación por:

Dr. Mustafa SALDIRIM, *Vicesecretario General del Tribunal de Casación*

Gözde HÜLAGÜ, *Unidad de la Reforma Judicial del Tribunal de Casación*

Puede acceder a la versión electrónica del presente libro desde:

<https://www.yargitay.gov.tr/documents/IstanbulBildirgesiveUygulamaTedbirleri.pdf>

Puede acceder más información sobre la Cumbre de Tribunales Supremos desde:

<http://summitofhighcourts2018.com/en/home.html>

TABLA DE CONTENIDO

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK EL 23 DE JULIO DE 2019 1

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y JUSTICIA PENAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIENA EL 24 DE MAYO DE 2019..... 4

DECLARACIÓN DE ESTAMBUL SOBRE LA TRANSPARENCIA JUDICIAL 7

MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA DECLARACIÓN DE ESTAMBUL..... 18

NOTA EXPLICATIVA..... 30

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK EL 23 DE JULIO DE 2019

Naciones Unidas

E/RES/2019/22



Consejo Económico y Social

Distribución: General

1 de Agosto de 2019

Sesión de 2019

Tema de la agenda 19 (c)

Resolución adoptada por el Consejo Económico y Social en la fecha 23 de Julio de 2019

*[Por la recomendación de la Comisión de Prevención de la
Delincuencia y Justicia Penal (E/2019/30)]*

2019/22. Incrementación de la Transparencia Judicial

Consejo Económico y Social,

Los Estados Partes, *recordando* la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción¹, especialmente incluido el artículo 11 que dicta la obligación de tomar medidas para fortalecer la honestidad y prevenir las oportunidades que pueden resultar en corrupción entre los miembros de la judicatura de acuerdo con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, asimismo, *recordando la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción: El Marco de Evaluación de la Guía de Aplicación para el Artículo 11*, que hace hincapié en la importancia de la transparencia en el proceso sobre la lucha contra corrupción en el poder judicial,

Recordando también la Carta de las Naciones Unidas, en la que los Estados Miembros han acordado, entre otras cosas, cooperar internacionalmente para incrementar y apoyar el respeto para los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación y demostrar

¹ Naciones Unidas, *Serie de Convenciones*, tomo 2349, Nu. 42146.

firmeza para crear las condiciones necesarias para la sostenibilidad de la justicia,

Recordando todos los principios internacionales sobre la transparencia judicial incluidos las disposiciones indicadas en La Declaración Universal de Derechos Humanos² y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos³, junto a otros documentos internacionales relevantes, y los compromisos y obligaciones de Los Estados Miembros por estos, asimismo, *considerando* otros documentos relevantes adoptados en el área internacional,

Aceptando que se debe brindar protección adicional a ciertos miembros de la sociedad, como los niños, las víctimas de violencia y las personas con necesidades especiales, y que estas personas son más frágiles cuando se enfrentan al sistema de justicia penal,

Recordando la resolución de la fecha 13 de diciembre de 1985 número 40/146 de la Asamblea General, en la que la Asamblea General adoptó Los Principios Fundamentales de la Independencia Judicial⁴,

Considerando Los Principios de Ética Judicial de Bangalore⁵, en los que se enfatizan los valores de independencia, imparcialidad, honestidad, integridad, igualdad, mérito y diligencia en la conducta judicial y *prestando atención* al Comentario sobre esto,

Afirmando que la falta de independencia, imparcialidad, honestidad, integridad, igualdad, mérito y diligencia en el poder judicial puede dañar el estado de derecho, fomentar la corrupción y afectar negativamente la confianza de la sociedad en el poder judicial,

Aceptando la diversidad de los marcos jurídicos de los Estados Miembros y *reconociendo* la diferencia de los varios planteamientos hacia la transparencia judicial de los Estados Miembros en concordancia con sus tradiciones constitucionales y legales,

1. *Toma en cuenta* los principios constituidos para garantizar la

² Resolución adoptada por la Asamblea General 217 A (III).

³ Ver la resolución adoptada por la Asamblea General 2200 A (XXI), anexo.

⁴ 7º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de agosto-6 de septiembre de 1985: Informe preparado por el Secretariado (publicación de las Naciones Unidas, número de venta E.86.IV.1), sección 1, parte D.2, anexo.

⁵ Resolución 2006/23, anexo.

transparencia judicial y los esfuerzos colectivos de los presidentes de tribunal y los altos jueces de los tribunales de 37 países que han desarrollado durante seis años las medidas establecidas para la implementación efectiva de estos principios, asimismo, *afirma* que **La Declaración de Estambul sobre la Transparencia Judicial y Las Medidas para la Implementación Efectiva de la Declaración de Estambul**⁶ aspiran incrementar y fortalecer la confianza pública en el derecho de un juicio justo prestado por un tribunal competente, independiente e imparcial,

2. *Solicita* a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y La Delincuencia que siga apoyando a los Estados Miembros que lo soliciten en sus esfuerzos para fortalecer el poder judicial en el marco de su misión y sus recursos disponibles;

3. *Invita* a los estados miembros a tomar en cuenta todos los documentos y las prácticas buenos, incluido **la Declaración de Estambul para la Transparencia Judicial** al formar programas y reformas legislativas sobre la administración judicial en conforme a sus marcos legales domésticos y sus obligaciones internacionales;

4. *Invita* a los estados miembros y otros donantes a proveer fuentes adicionales de fondos para realizar los propósitos de esta resolución conforme a las reglas y formalidades de las Naciones Unidas.

36ª Asamblea General

23 de Julio de 2019

⁶ A/73/831-E/2019/56, anexos I y II.

RRESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y JUSTICIA PENAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIENA EL 24 DE MAYO DE 2019

Naciones Unidas

E/CN.15/2019/L.12/Rev.1

**Consejo Económico y Social**

Distribución: Limitada

23 de mayo de 2019

Original: inglés

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

28ª Sesión

Viena, 20-24 de mayo de 2019

Artículo de la Agenda 6 (d)

La integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia y los estados miembros en el área de prevención del delito y la justicia penal: Otras cuestiones sobre la prevención de la delincuencia y la justicia penal

Turquía: Proyecto de resolución revisado

La Comisión de Prevención de la Delincuencia y Justicia Penal recomienda al Consejo Económico y Social que se adopte el proyecto de resolución siguiente:

Incrementación de la transparencia judicial

Consejo Económico y Social,

Los Estados Partes, *recordando* la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción⁷, especialmente incluido el artículo 11 que obliga a tomar medidas para fortalecer la honestidad y prevenir las oportunidades que pueden resultar en corrupción entre los miembros de la judicatura de acuerdo con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin perjuicio de la independencia judicial, asimismo, *recordando la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción: La Guía de Aplicación para*

⁷ Naciones Unidas, *Serie de Convenciones*, tomo 2349, Nu. 42146.

el Artículo 11, que hace hincapié en la importancia de la transparencia en el proceso sobre la lucha contra corrupción en el poder judicial,

Recordando también la Carta de las Naciones Unidas en el cual los Estados Miembros han acordado, entre otras cosas, cooperar internacionalmente para incrementar y apoyar el respeto para los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación y demostrar firmeza para crear las condiciones necesarias para la sostenibilidad de la justicia,

Recordando todos los principios internacionales sobre la transparencia judicial incluidos las disposiciones indicadas en La Declaración Universal de Derechos Humanos⁸ y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁹, junto a otros documentos internacionales relevantes, y los compromisos y obligaciones de los Estados Miembros por estos, asimismo, *considerando* otros documentos relevantes adoptados en el área internacional,

Aceptando que se debe brindar protección adicional a ciertos miembros de la sociedad como los niños, las víctimas de violencia y los individuos con necesidades especiales y que estas personas son más frágiles cuando se enfrentan al sistema de justicia penal,

Recordando la resolución de la fecha 13 de diciembre de 1985 número 40/146 de la Asamblea General, en la que la Asamblea General adoptó Los Principios Fundamentales de la Independencia Judicial¹⁰,

Considerando Los Principios de Ética Judicial de Bangalore¹¹, en los que se enfatizan los valores de independencia, imparcialidad, honestidad, integridad, igualdad, mérito y diligencia en la conducta judicial y *prestando atención* al Comentario sobre esto,

Afirmando que la falta de independencia, imparcialidad, honestidad, integridad, igualdad, mérito y diligencia en el poder judicial puede dañar el estado de derecho, fomentar la corrupción y afectar negativamente la confianza de la sociedad en el poder judicial,

⁸ Resolución adoptada por la Asamblea General 217 A (III).

⁹ Resolución adoptada por la Asamblea General 2200 A (XXI), anexo.

¹⁰ 7º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de agosto-6 de septiembre de 1985: Informe preparado por el Secretariado (publicación de las Naciones Unidas, número de venta E.86.IV.1), sección 1, parte D.2, anexo.

¹¹ Resolución 2006/23, anexo.

Aceptando la diversidad de los marcos jurídicos de los Estados Miembros y *reconociendo* la diferencia de los varios planteamientos hacia la transparencia judicial de los Estados Miembros en concordancia con sus tradiciones constitucionales y legales,

1. *Toma en cuenta* los principios constituidos para garantizar la transparencia judicial y los esfuerzos colectivos de los presidentes de tribunal y los altos jueces de los tribunales de 37 países que han desarrollado durante seis años las medidas establecidas para la implementación efectiva de estos principios, asimismo, *afirma* que **La Declaración de Estambul sobre la Transparencia Judicial y Las Medidas para la Implementación Efectiva de la Declaración de Estambul**¹² aspiran incrementar y fortalecer la confianza pública en el derecho de un juicio justo prestado por un tribunal competente, independiente e imparcial,
2. *Solicita* a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y La Delincuencia que siga apoyando a los Estados Miembros que lo soliciten en sus esfuerzos para fortalecer el poder judicial en el marco de su misión y sus recursos disponibles;
3. *Invita* a los estados miembros a tomar en cuenta todos los documentos y las prácticas buenos, incluido **la Declaración de Estambul para la Transparencia Judicial** al formar programas y reformas legislativas sobre la administración judicial en conforme a sus marcos legales domésticos y sus obligaciones internacionales;
4. *Invita* a los estados miembros y otros donantes a proveer fuentes adicionales de fondos para realizar los propósitos de esta resolución conforme a las reglas y formalidades de las Naciones Unidas.

¹² A/73/831-E/2019/56, anexos I y II.

DECLARACIÓN DE ESTAMBUL SOBRE LA TRANSPARENCIA JUDICIAL

Considerando que

La Declaración Universal de Derechos Humanos **RECONECE** como el principio fundamental que toda persona tiene el derecho de tener acceso a un proceso judicial llevado a cabo por un tribunal independiente e imparcial de manera justa y pública con toda igualdad en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil;

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos **MANIFIESTA** que toda persona es igual ante los tribunales y que toda persona, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil, tiene el derecho de tener acceso a una audiencia justa y pública ante un tribunal competente, independiente, imparcial y establecido por la ley dentro de un plazo razonable;

Los principios y derechos anteriormente mencionados también **SE RECONOCEN** y **SE MANIFIESTAN** por otros documentos y declaraciones internacionales y regionales de derechos humanos, constituciones, leyes y precedentes judiciales nacionales y también por las prácticas y tradiciones judiciales;

Hoy, **SE ACEPTA** universalmente que, en un estado respetuoso con los derechos humanos y el estado de derecho, el principio de transparencia es un elemento fundamental de los procesos judiciales;

LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE TRIBUNALES Y JUECES SUPREMOS DE LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO QUE SE HA CONVOCADO EN ESTAMBUL EN LA FECHA 20-21 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR INVITACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO **HAN DESARROLLADO Y ADOPTADO** LOS QUINCE PRINCIPIOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA JUDICIAL;

LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE TRIBUNALES Y JUECES SUPREMOS DE LA REGIÓN Balcánica, CONVOCADA EN BURSA, DEL 1 AL 4 DE JUNIO DE 2016, POR INVITACIÓN DEL

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO **HAN CONFIRMADO** ESTOS QUINCE PRINCIPIOS;

LOS PRESIDENTES DE TRIBUNALES SUPREMOS Y JUECES SUPREMOS DE TREINTA PAÍSES DE AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR, LOS CARIBES, EUROPA, ÁFRICA, ASIA Y PACÍFICO QUE REPRESENTAN LOS SISTEMAS JUDICIALES DESTACADOS DEL MUNDO Y QUE SE HAN CONVOCADO EN ESTAMBUL EN LA FECHA 11-12 DE OCTUBRE DE 2018 POR INVITACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO **HAN CONFIRMADO** ESTOS QUINCE PRINCIPIOS Y **HAN DESARROLLADO Y ADOPTADO** LAS MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE ESTOS PRINCIPIOS;

DECLARAN QUE LA DECLARACIÓN DE ESTAMBUL SOBRE LA TRANSPARENCIA JUDICIAL Y LAS MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE ESTOS PRINCIPIOS SON NECESIDADES FUNDAMENTALES PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA JUSTICIA Y EN EL PODER JUDICIAL.

*Principio 1***El juicio, como un principio fundamental, se debe realizar abierto al público.**

El hecho de que las audiencias estén abiertas al público es un requisito fundamental en una sociedad democrática. Según el principio de juicio público, los ciudadanos y la prensa se deben permitir a entrar en las salas de juicio. Por lo tanto, el tribunal debe garantizar que el público y la prensa puedan ver las audiencias. A dicho fin, la información sobre el tiempo y lugar de la audiencia debe ser pública. Tomando en cuenta el interés potencial para el juicio y la característica de la audiencia, deben proporcionarse las oportunidades suficientes razonables para la participación pública. En caso de que existan justificaciones legítimas definidas por la ley para limitar parcial o totalmente la participación del público o a la prensa en ciertas audiencias¹³, el juez debe asegurarse de que estas justificaciones sean públicas.

*Principio 2***El sistema judicial debe garantizar acceso fácil a los edificios judiciales y a la información.**

Si es posible, las salas de justicia deben estar cerca de los centros de transporte público para facilitar el acceso al tribunal. El sistema judicial debe establecer un sistema de información y un centro de recursos en un lugar cerca de los tribunales. Las oficinas de relaciones públicas deben tener letreros fáciles de leer, guías de información de la sala de justicia,

¹³ No es obligatorio aplicar el término de audiencia pública en todos los trámites legales que se realizan por presentación escrita o en decisiones antes de la audiencia. El artículo 14(1) del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos afirma que, en una sociedad democrática, la corte tiene la autoridad de excluir al público de las audiencias parcial o totalmente por razones de moralidad, orden público o seguridad nacional, o cuando los intereses de la vida privada de las partes lo requieran, o en la medida estrictamente requerida por situaciones especiales en las que la opinión pública perjudicaría la manifestación de la justicia. Salvo en tales circunstancias excepcionales, la audiencia debe estar abierta al público, incluidos los medios de comunicación, y no debe limitarse, por ejemplo, a determinados grupos de personas. Excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o los casos de custodia de menores, incluido los juicios no públicos, la sentencia, incluyendo a los descubrimientos fundamentales, las pruebas y las justificaciones legales, se debe pronunciar públicamente.

programas de trabajo de los tribunales y también personal del tribunal. Los edificios judiciales deben proveer habitaciones para los servicios profesionales legales, áreas adecuadas para rellenar los formularios dirigidos para el público y tener entrevistas y también oportunidades suficientes para grupos con necesidades especiales como los niños, las víctimas y las personas discapacitadas. Los usuarios del tribunal tienen derecho a un servicio a su debido tiempo y efectivo y, asimismo, a recibir una conducta moral, profesional y responsable de altos estándares del personal del tribunal.

Principio 3

El poder judicial debe facilitar el acceso al sistema judicial.

Los tribunales deben presentar formularios e introducciones estándares y sencillos a los usuarios potenciales del tribunal; y deben ofrecer información clara y precisa sobre los costos de juicio, los procedimientos y los calendarios judiciales. Esta información también se debe divulgar por el internet. Los tribunales, en circunstancias oportunas, deben adoptar el sistema de “sala da justicia con múltiples entradas” para informar a los usuarios potenciales del tribunal de que existen varios caminos para lograr justicia y que presentar una demanda es solamente uno de estos caminos. Los tribunales, a tal fin, deben prestar ayuda para solicitudes de asistencia legal. Cuando no hay suficiente asistencia jurídica disponible para el público, es responsabilidad del poder judicial tomar iniciativas de interés público, como fomentar la representación pro bono de los litigantes necesitados de asistencia jurídica por parte de profesionales del Derecho, designar amigos del tribunal (*amici curiae*) o proponer la resolución alternativa de litigios. Los tribunales pueden permitir a personas adecuadas sin licencia a representar las partes ante el tribunal.

Principio 4

El poder judicial debe proporcionar servicios gratuitos de traducción e interpretación a los usuarios de los tribunales.

El derecho de que la persona acusada entienda la acusación dirigida a sí mismo en su lengua materna es un derecho humano fundamental. En caso de que la persona acusada no entienda y hable la lengua utilizada en el tribunal, su acceso a interpretación gratuita es también un derecho

humano fundamental. De hecho, la incapacidad del usuario del tribunal para comprender los idiomas utilizados en el tribunal significa que el juicio carece totalmente de transparencia para esta persona. Durante el juicio, podrá ser que un documento no se puede presentar como prueba en ciertos casos o un testigo no puede atestiguar sin traducción o interpretación. Por esta razón, el juez y la administración judicial son responsables de que existan las posibilidades necesarias para traducción e interpretación.

Principio 5

El poder judicial debe asegurar la transparencia en la asignación de los juicios.

Los sistemas de tribunales varían en los métodos de asignación de los juicios a los jueces. En algunos países, el presidente del tribunal es responsable de decidir el método de asignación de los juicios. En algunos otros países, la asignación de los juicios es responsabilidad de los administradores del tribunal en lugar de los jueces. Una tercera opción es la asignación aleatoria de los juicios por mano o automación. Últimamente, la asignación se puede realizar según criterios no oficiales como precedentes establecidos de los tribunales u otras reglas y leyes oficiales que obligan los tribunales. Cualquiera que sea el modelo que se adopte, la división de trabajo entre los jueces de un tribunal, incluida la asignación de los juicios, se debe realizar sistemáticamente según regulaciones transparentes predeterminadas por la ley o por el reglamento del tribunal que se aceptaron por los jueces del tribunal. Del mismo modo, un juez no se debe retirar de un juicio excepto por las razones y métodos indicadas en la ley o el reglamento del tribunal.

Principio 6

El poder judicial debe garantizar la transparencia en la realización de la justicia.

La integración de la justicia con la sociedad necesita la apertura del sistema judicial al público y aprender cómo hacerse inteligible. Bajo el monitoreo del poder judicial, el público, la prensa y los usuarios del tribunal deben poder acceder de manera segura a toda la información acerca de los procesos judiciales en curso o anteriores. Este acceso se puede proveer por el sitio web del tribunal o por registros adecuados y accesibles. Esta información debe incluir las sentencias justificadas, las peticiones, las solicitudes y las pruebas. Las declaraciones juradas que todavía no

han sido aceptadas como pruebas por el tribunal y otros documentos parecidos de naturaleza de prueba se pueden excluir. El acceso a los documentos del tribunal no debe ser limitado al material que tiene que ver con el juicio, también debe incluir la recaudación de las tarifas del juicio, el uso de las provisiones del presupuesto y otros datos acerca del presupuesto y además los datos administrativos sobre el tribunal como las estadísticas de índice de finalización de juicios. Los jueces deben explicar los posibles conflictos de interés.

Principio 7

El poder judicial debe tener la facultad de supervisión sobre la detención ejecutiva.

Para garantizar que el sistema judicial no sea objeto de críticas injustas debido a retrasos en las audiencias, el poder judicial debe estar facultado por ley para llevar ante un tribunal a las personas detenidas por la administración o el ejecutivo. Aunque esta cuestión principalmente tiene que ver con los derechos humanos, es un método que garantizará la transparencia en la percepción del público sobre la administración de justicia.

Principio 8

El poder judicial debe garantizar la publicación periódica de las sentencias de los tribunales supremos/de casación.

Sin acceso seguro a las leyes, la doctrinas y otras fuentes legales principales, las partes litigantes de un juicio, incluido los jueces, los abogados y las administraciones públicas carecen de una guía claramente inteligible sobre cómo la ley debe aplicarse en un cierto caso. La publicación de las sentencias facilita que el público, la prensa, las organizaciones de la sociedad civil, los abogados, los jueces y los académicos de derecho puedan examinar el trabajo de los jueces. La presentación de las sentencias al escrutinio público a través de publicaciones también hace la aplicación de las leyes más sistemática, las sentencias judiciales más previsibles y consistentes y así aumenta la calidad de la justicia. En los sistemas judiciales en los cuales las sentencias de los tribunales supremos presentan precedentes vinculantes, la publicación y distribución de las sentencias de los tribunales supremos o de casación es muy importante para asegurar que los jueces de tribunales inferiores y las administraciones públicas exijan el cumplimiento de las leyes. Incluso en los países en los que las sentencias de los

tribunales superiores son puramente instructivas, sigue siendo importante garantizar que los jueces interpretan la ley escrita de forma coherente. Se espera crear bases de datos de acceso público que contengan las sentencias de los tribunales, los textos judiciales y los artículos publicados en las revistas judiciales.

Principio 9

El poder judicial debe apoyar los programas dirigidos a los estudiantes sobre el proceso judicial.

El poder judicial debe apoyar los programas en las escuelas y las universidades que aspiran a desarrollar un entendimiento acerca del proceso judicial y así contribuir a la transparencia y debe participar en estos programas. Estos programas pueden incluir visitas a los tribunales, participación de los jueces en las clases, juego de roles, uso de materiales audiovisuales y enseñanza activa de los métodos judiciales. Los programas mencionados sirven para prevenir el desconocimiento e ideas erróneas sobre el sistema judicial y su funcionamiento.

Principio 10

El poder judicial debe iniciar y/o apoyar programas dirigidos al público diseñados para educar al público sobre el papel del sistema judicial.

La transparencia no está limitada a la prestación de acceso a los trámites o los datos de los tribunales. Además, para garantizar la transparencia, la información debe difundirse en una forma de fácil acceso, especialmente para el público destinatario como usuarios de tribunales que no tienen una formación legal o tienen una alfabetización limitada. La divulgación de información sobre el funcionamiento de los tribunales y las actividades del poder judicial para incrementar la calidad y efectividad de la justicia también afecta de manera positiva la confianza del público en el poder judicial.

El acceso público del poder judicial implica que los jueces tomen medidas con visión de futuro y establezcan vínculos directos y bilaterales con la sociedad a la que prestan servicio. Materiales que aumentan la conciencia como reuniones públicas, programas de televisión y radio y guías para los usuarios de los tribunales se pueden mencionar como ejemplos. Estas

guías, en forma de libros cortos, pueden ofrecer la información fundamental acerca de detención, encarcelamiento, fianza, pena y métodos de procedimiento judicial e información de contacto para víctimas de crimen, testigos y otros usuarios de servicios.

Dichos programas dirigidos hacia el acceso y enseñanza del público sobre los servicios y métodos de los tribunales son beneficiosos tanto para el poder judicial como para los usuarios de los tribunales. Estos programas facilitan aclarar muchas de las complejidades que marcan la relación activa del tribunal con el público y el funcionamiento del sistema judicial. De esta manera, al implicar y educar al público en los procedimientos judiciales mediante estrategias de comunicación judicial predictiva y de divulgación pública, los tribunales pueden aumentar la confianza pública fortalecer el respeto para el estado de derecho en la sociedad.

Principio 11

El poder judicial debe proveer la ayuda y el acceso a la prensa para que esta pueda realizar su misión legítima de informar al público sobre los procesos judiciales incluidas las sentencias judiciales.

Reunir, divulgar, informar e interpretar información para el público sobre la administración judicial antes, durante y después de audiencia, incluidos los juicios, sin perjudicar la audiencia cerrada, el principio de presunción de inocencia y los derechos de las partes del conflicto es la función y la misión de la prensa. Este principio, que incluye la libertad de decidir cuáles juicios y en qué manera se presentarán a la atención del público y el derecho de criticar la fundación y funcionamiento del sistema judicial, solamente se podrá abandonar en la escala indicada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El acceso de la prensa a los procesos judiciales no consiste solo en abrir las puertas de la sala de audiencias y ofrecer asientos a los periodistas. La publicación de noticias erróneas y sensacionalistas sobre los procedimientos judiciales no sirven para los tribunales de manera positiva. De hecho, las noticias deficientes o tendenciosas por parte de los medios de comunicación pueden dañar la confianza pública en el poder judicial y resultar en preocupaciones acerca de la independencia, imparcialidad y honestidad del poder judicial. La formación de periodistas por parte de los tribunales o en cooperación con ellos puede contribuir a reducir las noticias inefectivas. Dicha formación estar diseñada de una manera adecuada para

ofrecer información básica a los periodistas sobre los métodos judiciales y temas legales y así desarrollar la capacidad y ética periodística y establecer confianza entre los jueces y los periodistas.

Actuar junto con la prensa puede necesitar que se establezcan una oficina de prensa en cada tribunal y que los tribunales tengan vínculos activos con los periodistas para facilitar las noticias sobre los procesos judiciales. Estas oficinas pueden relacionarse con los representantes de la prensa, responder las demandas de los periodistas y manejarlas, publicar boletines de prensa y ofrecer información correcta sobre las sentencias judiciales y los temas legales en términos generales. Estas oficinas también pueden proveer el calendario de los próximos juicios, monitorear la precisión de las noticias que salen en la prensa y planificar campañas mediáticas para desarrollar el entendimiento del público acerca del poder judicial.

Principio 12

El poder judicial debe evaluar la satisfacción del público acerca de la realización de la justicia y así esforzarse por aumentar la calidad de la justicia.

Existen varias herramientas para medir el nivel de satisfacción del público acerca de la realización de la justicia. Además de ser sensible a las contribuciones de la comunidad académica, el poder judicial debe estimular los usuarios de los tribunales para que ofrezcan retroalimentación. Un sistema efectivo e imparcial, auditoría sistemática de los juicios, cuestionarios periódicos dirigidos a los usuarios de los tribunales y otros interesados, entrevistas con los consejos de usuarios de los tribunales son maneras de examinar la satisfacción del público acerca de la realización de la justicia e identificar especialmente las debilidades sistemáticas en el proceso judicial que pueden resultar en la proliferación de “guardianes de acceso” que buscan sus propios intereses. Sin embargo, si no se aprenden las lecciones y no se toman medidas correctoras, estas prácticas carecerán de sentido. Publicar informes anuales de prácticas que incluyen las acciones para resolver las complejidades enfrentadas y desarrollar el funcionamiento del sistema judicial es una medida que puede aumentar la confianza pública en el poder judicial.

*Principio 13***El proceso de designación de los jueces debe ser transparente.**

Generalmente se acepta que la transparencia de las condiciones de elección de los candidatos para ser jueces es una necesidad. Los criterios de designación y elección, incluidas las cualidades requeridas para los candidatos de juez supremo, deben ser públicos para establecer la transparencia y la responsabilidad del proceso. Todas las vacantes en el poder judicial se deben anunciar de una manera que se invite a los candidatos adecuados a solicitar o nombrar a otros candidatos adecuados. Esto facilita que los métodos de designación y ascenso por mérito en el poder judicial sean accesibles para una reserva de candidatos que refleja la sociedad en su totalidad y diversidad tanto como sea posible. Además, la publicación de las vacantes y las listas de los candidatos para estos puestos permite que el público supervise el proceso de designación.

Aunque existen varios métodos en la designación de los jueces, existe un consenso unánime en las iniciativas actuales internacionales y regionales de que, para proteger la independencia del poder judicial, es necesario que la designación y ascenso de los jueces no se lleven a cabo por el poder legislativo y el poder ejecutivo, sino por un órgano independiente como un Consejo Judicial, junto con la aprobación oficial del Presidente del Estado en la designación al judicatura suprema. Cada miembro del poder judicial y los miembros de la sociedad deben actuar según sus propios papeles definidos en la elección de candidatos adecuados para los puestos judiciales. Los miembros no judiciales del poder judicial podrán ser elegidos entre los juristas destacados o ciudadanos cuya reputación y experiencia sean reconocidas por todos, identificados por un mecanismo adecuado de designación. La estructura mixta previene la percepción de interés propio, autoprotección y nepotismo y refleja los diferentes puntos de vista en la sociedad, por lo tanto, contribuye al nivel de legitimidad del poder judicial.

*Principio 14***El poder judicial debe responder a las quejas sobre conductas no éticas de los jueces de una manera transparente.**

Es necesario que el poder judicial no solo debe adoptar un código de conducta, sino también asegurar que tal código se divulgue ampliamente en la comunidad. Sin embargo, si los principios de ética judicial no son aplicables, tendrán poco impacto en la mejora de la eficiencia del poder

judicial y en el fortalecimiento de la confianza pública. Por lo tanto, se debe establecer un mecanismo fiable e independiente en la forma de un Consejo de Examen de Ética Judicial para recibir, investigar, resolver y determinar las quejas sobre conductas no éticas de los miembros del poder judicial, en los casos de que no existan provisiones para la referencia de tales quejas a los tribunales. El consejo establecido de tal manera no se debe controlar por el poder judicial, sino debe contar con una representación suficiente de personas que no son profesionales judiciales para atraer la confianza de la comunidad. Vincular personas externas a la judicatura (abogados, académicos y representantes de la comunidad) con el monitoreo de los principios éticos prevendrá una posible percepción de interés personal y autoprotección y proveerá el elemento esencial de transparencia.

Principio 15

El proceso disciplinario de los jueces debe ser transparente.

La facultad de sancionar o destituir a un juez debe pertenecer a un órgano independiente (o en el Consejo Judicial responsable de la designación de los jueces), que consiste en jueces activos o jubilados pero que debe incluir también personas que no son jueces, a condición de que estas otras personas no sean miembros del poder legislativo o ejecutivo. En el caso de que el Presidente del Estado o el poder legislativo tenga la facultad de destituir a un juez, este poder solamente se debe utilizar a pedido de este órgano independiente. La decisión final en cualquier procedimiento iniciado contra un juez que implica una sanción contra tal juez sea a puerta cerrada o público, se debe publicar. El denunciante, si lo hubiera, se debe informar sobre la consecuencia de la investigación acerca de su queja.

MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA DECLARACIÓN DE ESTAMBUL

Esta declaración de medidas se ofrece como recomendaciones o referencias para la implementación efectiva de la Declaración de Estambul sobre la Transparencia Judicial. Estas medidas deben ser adoptadas por el poder judicial. Sin embargo, algunas de las medidas pueden requerir recursos que el poder judicial actualmente no tenga, o pueda requerir más acciones legislativas o ejecutivas para su implementación efectiva. En consecuencia, otros órganos del estado deben cooperar con el poder judicial y activamente apoyar el poder judicial para asegurar la implementación completa y expeditiva de estas medidas.

Principio 1

El juicio, como un principio fundamental, se debe realizar de manera pública.

Dado que la transparencia en el proceso judicial es un componente fundamental para asegurar y mantener la confianza pública en la administración de justicia, el poder judicial debe:

1. Establecer procedimientos y proveer instalaciones adecuadas para garantizar que los procedimientos de tribunal estén abiertos al público y a la prensa.
2. Tomar las medidas para garantizar que haya suficientes asientos en las salas de audiencia para que el público atienda y atestigüe los procedimientos judiciales.
3. Establecer procedimientos para garantizar que el público esté informado de la información sobre el tiempo y lugar de la audiencia.
4. Facilitar acceso y facilidades adecuadas a los miembros de la prensa para que observen los procedimientos.
5. Establecer procedimientos normalizados que obliguen a los jueces emitir las sentencias de una manera oportuna y abierta.
6. Garantizar que las excepciones al juicio público solamente se determinen por la ley y no entren en conflicto con el Artículo 14 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Principio 2

El sistema judicial debe garantizar un acceso fácil a los locales de los tribunales y a la información.

Dado que el acceso físico a la justicia es un componente fundamental para promover la confianza pública en la administración de la justicia, el poder judicial debe:

1. Siempre que sea posible, y dentro de los límites de recurso, asegurarse de que las instalaciones del tribunal estén situadas cerca de los centros de transporte público.
2. Apoyar las innovaciones en la prestación de servicios judiciales, como tribunales móviles o programas de tribunales nocturnos, teleconferencias o videoconferencias o realizar audiencias preliminares en salas de chat en línea, teniendo en cuenta a las personas que físicamente no puedan viajar para atender a las audiencias o tener acceso a los servicios del tribunal.
3. Colocar letreros claros y fáciles de identificar que indiquen las direcciones a las oficinas en la instalación.
4. Instalar mostradores de información o de servicios a la entrada del tribunal para ofrecer información a los usuarios del tribunal.
5. Publicar los programas de las audiencias, los juicios y las salas de tribunal pública y claramente.
6. Emplear y mantener personal de tribunal que pueda hablar el idioma de los usuarios del tribunal, o como alternativa poder obtener prontamente la asistencia de intérpretes.
7. Proporcionar áreas de espera cómodos para los usuarios del tribunal, incluido áreas que ofrecen seguridad debida a los testigos, cuando sea necesario.
8. Proporcionar instalaciones adecuadas a las necesidades especiales de los usuarios del tribunal, como los niños, las víctimas de violencia sexual o doméstica y usuarios con necesidades especiales.
9. Proporcionar edificios judiciales seguros, limpios, convenientes y fáciles de usar.
10. Crear un centro de recursos que ofrezca un servicio con el principio de “una sola parada”.

11. Publicar guías de usuario, carteles y otro material informativo en formato sencillo, claro y accesible.
12. Introducir programas educativos obligatorios de administración para los jueces y el personal de tribunal.
13. Crear un sitio de web público que contenga información útil para los usuarios de tribunal como tiempos de sesiones de tribunal, guías de la sala de justicia e información acerca de juicios relevantes.

Principio 3

El poder judicial debe facilitar el acceso al sistema judicial.

Dado que la comprensión del proceso judicial por las partes y el público es un componente fundamental de transparencia judicial, responsabilidad y administración justa de la justicia, el poder judicial debe:

1. Desarrollar e implementar formularios e instrucciones estándares y fáciles de usar.
2. Publicar información clara y precisa acerca de temas como tarifas de demanda, procedimientos de tribunal y calendario de audiencias, y si los recursos permiten, divulgar tal información por el internet y sistemas telefónicos automáticos.
3. Implementar sistemas que permitan a los usuarios del tribunal obtener formularios desde el internet y pagar las costas procesales a través de Internet.
4. Implementar sistemas que permitan a las partes litigantes y el público obtener información del juicio, incluido la sentencia, en un sitio web.
5. Establecer o promover la fundación de una oficina de Defensoría Pública cuya intervención se puede requerir en respecto a algún tema de la ley penal.
6. Requerir un abogado a proporcionar servicios gratuitos (*pro bono*)¹⁴ a una parte litigante que no tenga suficientes recursos para cubrir el costo de la representación legal en el tribunal.
7. Impulsar el establecimiento de Clínicas de Ayuda Legal para

¹⁴ *Pro bono* es un término latino que identifica el servicio profesional que un abogado ofrece gratuitamente.

proporcionar servicios legales a personas indigentes.

8. Implementar un enfoque del sistema judicial de puertas múltiples para resolución de disputa que ofrece una variedad de procesos de resolución de disputa, incluido evaluación del caso, mediación, arbitración, conciliación y administración compleja de juicio. Estos servicios se deben brindar por intermediarios, evaluadores de caso y árbitros calificados, competentes y experimentados, y hacerse disponible antes de iniciar una demanda u otra etapa del juicio.
9. Establecer un centro de resolución de disputa amistosa que ofrece a las partes litigantes una alternativa económica en lugar de las medidas convencionales de resolver disputas civiles, especialmente en temas como herencia, mantenimiento, custodia y disputas matrimoniales.
10. Permitir a las partes presentar pruebas por medios electrónicos.
11. Permitir que una persona sin licencia adecuada asista a una parte ante el tribunal, cuando las circunstancias lo justifiquen.¹⁵

Principio 4

El poder judicial debe ofrecer posibilidades de traducción e interpretación gratuitas.

Dado que la capacidad de seguir y entender los procedimientos judiciales en los cuales un litigante esté involucrado es un componente fundamental de la transparencia judicial y la confianza en la justicia de las sentencias judiciales, el poder judicial debe:

1. Asegurarse de que las partes ante el tribunal comprenden el idioma en los procedimientos judiciales.
2. Proporcionar asistencia de interpretación gratuita a un usuario de tribunal o un testigo si la persona no puede entender o hablar el idioma del procedimiento judicial.

¹⁵ La persona “sin licencia” puede ser una persona amiga o familiar que no tiene la licencia para practicar la profesión legal y quiere asistir a una parte.

Principio 5

El poder judicial debe garantizar la transparencia en la asignación de los juicios.

Dado que la confianza pública en la independencia e imparcialidad del juez es un componente fundamental para mantener y continuar la confianza en la administración de justicia, el poder judicial debe:

1. Establecer por reglamento de tribunal un sistema predeterminado, objetivo y transparente para repartir y asignar los juicios a los jueces de cada tribunal. Tal sistema puede fundarse sobre la base de un orden alfabético o cronológico u otro proceso de selección aleatorio que asegura la objetividad en la asignación de los juicios.
2. Garantizar que un juicio no se retire de un juez sin razones válidas, como una enfermedad seria o un conflicto de interés. Las justificaciones admisibles y el procedimiento para retiro se deben proporcionar por el reglamento del tribunal.
3. Establecer un sistema que requiera a un juez declarar al tribunal, en el tiempo de su designación inicial y posteriormente anualmente, cualquier afiliación, actividad exterior y otros intereses no financieros e identificar todos conflictos o conflictos potenciales para ayudar y facilitar el reparto y la asignación de casos.
4. Garantizar que el juez revele a las partes del proceso y a sus representantes legales cualquier conflicto actual o potencial de interés que pueda resultar en que una persona razonable cuestione la capacidad del juez para ser justo y objetivo en el tema ante el tribunal, y por lo tanto ofrecer las partes y sus representantes legales una oportunidad para solicitar que el juez se recuse a sí mismo de los procedimientos.

Principio 6

El poder judicial debe garantizar la transparencia en la realización de la justicia.

Dado que la imagen y la actualidad de transparencia son componentes fundamentales en el rendimiento de las funciones judiciales y la administración de justicia, el poder judicial debe:

1. Requerir que un juez exprese en su sentencia los hechos, la ley y el razonamiento legal que justifica su decisión.

2. Disponer de un secretario del tribunal para facilitar acceso fácil a los registros de tribunal y recuperación rápida de información.
3. Establecer sistemas, conforme a la ley de privacidad, que proporcionan acceso a la información pertinente a los procedimientos judiciales, pendientes o concluidos, incluido las sentencias justificadas, demandas, solicitudes y pruebas, excepto declaraciones juradas y otros documentos probatorios parecidos que no hayan sido admitidos como prueba.
4. Publicar periódicamente información acerca de las estadísticas de la carga de juicio y los índices de resolución de juicios del tribunal.
5. Garantizar que la información sobre datos de presupuesto, como recaudación de las tarifas de juicio y uso de las provisiones del presupuesto, esté disponible para el público.

Principio 7

El poder judicial debe tener la facultad de supervisión sobre la detención ejecutiva.

Dado que la detención ilegal o inhumana de las personas es contra el estado de derecho, la administración justa y abierta de justicia y el principio de proceso debido legal, el poder judicial debe:

1. Establecer un sistema estructurado de visitas a las prisiones por miembros del poder judicial para garantizar la supervisión independiente de la detención administrativa o ejecutiva.¹⁶
2. Requerir que las personas que permanecen en detención administrativa o ejecutiva se presenten ante el tribunal de manera oportuna y que las autoridades sean requeridas a revelar al tribunal las razones y la justificación legal de tal detención.
3. Ordenar que las personas que permanecen en detención administrativa o ejecutiva se liberen si las autoridades no logren proporcionar la justificación factual y legal adecuada para tal detención.

¹⁶ “Las detenciones administrativas o ejecutivas” generalmente son casos de que un individuo se detenga por el estado sin proceso judicial en el marco de seguridad social, emigración o leyes de salud mental.

Principio 8

El poder judicial debe garantizar la publicación sistemática de las sentencias de los tribunales supremos/de casación.

Dado que la consistencia de la interpretación de la ley y los principios legales son un componente fundamental de la administración justa de justicia, el poder judicial debe:

1. Establecer procedimientos que faciliten a los usuarios del tribunal tener acceso a la información relevante, incluidas las leyes nuevas y las decisiones de los tribunales supremos y de casación de una manera más fácil, incluso por publicar tal material en el sitio web oficial.
2. Establecer procedimientos para garantizar la publicación periódica de las sentencias de los tribunales supremos o de casación.
3. Crear una base de datos públicamente accesible que contenga los textos de las decisiones y los estatutos de los tribunales, así como los artículos académicos y artículos en las revistas judiciales.

Principio 9

El poder judicial debe apoyar los programas dirigidos a los estudiantes sobre el proceso judicial.

Dado que promover y fortalecer respeto para el estado de derecho y el papel del poder judicial depende del entendimiento multigeneracional de los principios fundamentales legales y los derechos individuos, el poder judicial debe:

1. Establecer programas regulares de involucramiento de estudiantes que incluyan visitas organizadas de los estudiantes a los tribunales, visitas de los jueces a las clases y enseñanza activa de los métodos judiciales en colaboración con los profesionales legales y las instituciones de educación superior.

Principio 10

El poder judicial debe iniciar y/o apoyar programas dirigidos al público diseñados para educar al público sobre el papel del sistema judicial.

Dado que la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral e integridad del poder judicial están supeditados al entendimiento público del proceso judicial, el poder judicial debe:

1. Establecer programas de divulgación pública, incluidas reuniones públicas, que proporcionen una oportunidad para que los usuarios del tribunal interactúen con el poder judicial sobre sus problemas.¹⁷
2. Participar en programas de radio y televisión para divulgar información sobre el funcionamiento del poder judicial, su papel cívico y los procesos judiciales.
3. Publicar, incluso a través de internet, boletines y otros materiales cortos, claros y fácilmente comprensibles que proporcionen información básica acerca de detención, encarcelamiento y fianza, procedimientos criminales y civiles, y contactos útiles para víctimas de crimen, testigos y otros usuarios de los tribunales.

Principio 11

El poder judicial debe proveer la ayuda y el acceso adecuados a la prensa para que esta pueda realizar su misión legítima de informar al público sobre los procesos judiciales incluidas las sentencias judiciales.

Dado que la prensa es una fuente principal de la cual el público recibe información y comentario sobre la administración de justicia, el poder judicial debe:

1. Establecer una oficina de relaciones con la prensa y el público para facilitar la cobertura mediática de los procedimientos judiciales en coordinación con los representantes de la prensa, responder a las solicitudes de los periodistas y manejarlas, emitir comunicados de prensa, y en términos generales proveer información precisa acerca de las decisiones judiciales y temas legales. Esta oficina debe proporcionar

¹⁷ La reunión popular es la reunión que se realiza con los miembros de la comunidad en la alcaldía, una escuela u otro lugar adecuado.

un calendario de los próximos juicios, apoyar la prensa en cobertura precisa y diseñar campañas mediáticas que promuevan el entendimiento público sobre el poder judicial.

2. Establecer un programa para fomentar la confianza entre la prensa y el poder judicial para ofrecer enseñanza a los periodistas que incluya educación básica sobre la estructura del tribunal, procedimientos del tribunal, métodos de acceso a la información del tribunal y temas legales.

Principio 12

El poder judicial debe evaluar la satisfacción del público acerca de la realización de la justicia y así esforzarse para aumentar la calidad de la justicia.

Dado que el mantenimiento de la confianza pública persistente en la administración de justicia depende de la calidad de justicia, el poder judicial debe:

1. Establecer un Consejo Público de Reclamaciones en cada tribunal que conste de jueces, abogados y ciudadanos para recibir, revisar y, cuando sea aplicable, referir al órgano disciplinario pertinente las reclamaciones de los usuarios del tribunal contra los funcionarios judiciales y personal del tribunal.
2. Colocar buzones de quejas públicos en cada edificio de los tribunales donde el público pueda presentar quejas, incluso anónimas, contra los funcionarios judiciales, personal del tribunal y los procedimientos judiciales.
3. Garantizar que El Presidente del Tribunal y/o el Secretario de cada tribunal adopte una política de “puerta abierta” para las reclamaciones.
4. Realizar evaluaciones periódicas del rendimiento del personal del tribunal.
5. Establecer una Junta de Usuarios de los Tribunales en cada tribunal.
6. Establecer un sistema para entrevistar con los usuarios del tribunal y otros interesados y realizar encuestas con estos para identificar los desafíos y debilidades sistemáticas.
7. Exigir la supervisión periódica de los casos por parte de los jueces y

el personal de los tribunales para garantizar la disposición oportuna de los casos.¹⁸

8. Establecer un programa a través del cual los jueces y el personal del tribunal realicen revisión y análisis sistemáticos de las reclamaciones de los usuarios del tribunal y desarrollar respuestas a las reclamaciones cuando sean justificadas.
9. Implementar un programa de realización de inspecciones del tribunal sin previo aviso.
10. Impulsar evaluaciones críticas de propio rendimiento por parte del entorno académico.
11. Formular una estrategia integral del todo el sistema diseñado para corregir las percepciones negativas del público y eliminar ineficiencias u otros obstáculos en el proceso judicial que causan a tales percepciones.
12. Publicar un informe anual de sus actividades, incluido cualquier dificultad enfrentada y medidas tomadas para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia.

Principio 13

El proceso de designación de los jueces debe ser transparente.

Dado que jueces competentes, independientes e imparciales son fundamental para establecer y mantener la confianza pública en la administración de justicia, el poder judicial debe:

1. Establecer un órgano independiente, basado en una amplia representación profesional y de la sociedad civil para recibir y revisar las aplicaciones y/o nombramientos para puestos judiciales.
2. Requerir que todos los puestos vacantes judiciales, incluidos los puestos judiciales supremos, se divulguen con la información acerca de las cualidades necesarias para los candidatos a estos puestos.
3. Requerir la publicación de una lista de puestos judiciales vacantes y la lista de candidatos que hayan aplicado o se hayan nombrado para dichos puestos.

¹⁸ “Auditoría de juicio” es el examen del archivo de juicio según las leyes sobre el código de procedimiento para identificar las etapas demoradas de los trámites judiciales.

4. Promulgar procedimientos que aseguren que el público y la prensa tenga acceso a las entrevistas con los candidatos por el órgano responsable de designación y nombramiento de las personas para puestos judiciales.
5. Establecer un proceso de contratación y promoción basado en el mérito que refleje la diversidad de la sociedad.
6. Promulgar procedimientos que regulen el traslado de los jueces por rotación regular o en caso de emergencia.

Principio 14

El poder judicial debe responder a las denuncias sobre conductas no éticas de los jueces de una manera transparente.

Dado que el compromiso con los valores judiciales principales como enunciados en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial es un componente fundamental para promover la confianza pública en la administración de justicia, el poder judicial debe:

1. Desarrollar y divulgar reglas y estándares de conducta profesional y ética para los miembros del poder judicial, teniendo en consideración los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial.
2. Garantizar que cada juez posea una copia escrita de los principios éticos y profesionales y otros materiales relevantes, como comentarios.
3. Divulgar los principios de la ética judicial en la sociedad a través de publicación escrita o en línea.
4. Establecer un mecanismo o procedimiento por el cual los jueces individuales puedan solicitar asesoramiento sobre la conveniencia de la conducta propuesta.
5. Establecer un mecanismo o procedimiento independiente con representación no profesional suficiente para recibir y examinar las reclamaciones de conducta no ética contra los miembros del poder judicial y tomar acciones adecuadas, incluido, cuando sea justificado, referir a un órgano disciplinario independiente.
6. Desarrollar programas o módulos sobre la ética judicial y hacerlos obligatorios en la formación inicial para los jueces.

7. Promulgar procedimientos que requieran los miembros del poder judicial declarar periódicamente sus activos y pasivos financieros.

Principio 15

El proceso disciplinario de los jueces debe ser transparente.

Dado que procedimientos disciplinarios judiciales cerrados u oscuros diseñados de una manera que proteja los jueces de la responsabilidad de su conducta socavan la confianza pública en la integridad de los procesos judiciales, el poder judicial debe:

1. Identificar los comportamientos que puedan resultar en sanciones disciplinarias.
2. Introducir y publicar un procedimiento para reclamar un juez en cuanto a su capacidad profesional.
3. Establecer un órgano de investigación independiente, con participación no profesional, para recibir reclamaciones contra un juez en cuanto a su capacidad profesional, para investigar estas reclamaciones y para determinar qué acción, si alguna sea justificada, incluido referir al órgano disciplinario independiente.
4. Establecer un órgano disciplinario independiente, que incluya representación laica, con potestad para destituir a los jueces. El juez cuya destitución se solicita debe tener todo derecho de defensa ante tal órgano, incluido representación legal; una investigación realizada con referencia a los estándares establecidos de la conducta judicial; y la conclusión expedita de tal investigación. En caso de decisión de destitución, el juez tiene el derecho de apelar a un tribunal adecuado.
5. Establecer procedimientos que aseguren que el denunciante sea informado del progreso de la investigación.
6. Garantizar que la decisión final en un procedimiento disciplinario contra un juez que resulte en sanción sea publicada o divulgada de otra manera.

NOTA EXPLICATIVA

La transparencia es un componente fundamental del proceso judicial. La Declaración Universal de Derechos Humanos consta del decreto “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reitera el derecho de ser oída públicamente y con justicia y expresa que, en sociedades democráticas, el público y la prensa se pueden excluir total o parcialmente de una audiencia por razones de moral pública, orden público (*ordre public*) o seguridad pública, o cuando se exija por los intereses de las partes por sus vidas privadas, o en condiciones especiales en las cuales la publicidad pueda dañar la realización de justicia y absolutamente en la medida en que el tribunal lo considere estrictamente necesario. Por otro lado, el Pacto establece que la sentencia dictada de un juicio criminal o civil se declarará públicamente salvo en los casos de disputa familiar, juicios sobre la custodia del niño o en los cuales el interés del niño requiera lo contrario.

El principio de independencia del poder judicial, establecido en los Principios Básicos de la ONU sobre Independencia Judicial se ha completado con el principio de responsabilidad de la judicatura encontrado en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial. La Magna Carta de los Jueces Europeos, que resume y regula las reflexiones adoptadas por el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos enfatiza la importancia de acceso a resolución de disputa rápida, efectiva y económica y decisiones justificadas que se promulgan pública y oportunamente y se basan en audiencias justas y públicas. La Conferencia de Presidentes de Tribunales Supremos Europeos que se ha convocado bajo el patrocinio del Consejo Europeo en Eslovenia ha preparado una declaración titulada “El Tribunal Supremo: Publicidad, Visibilidad y Transparencia”. Esta declaración ha reconocido “la necesidad de satisfacer las esperanzas de la sociedad moderna relacionadas con la justicia” y ha enfatizado la importancia de que los tribunales “demuestran apertura y sensibilidad”. La declaración ha indicado que las sentencias judiciales “basadas en razonamientos claros y fácilmente comprensibles” deben accesibles al público, que el proceso de designación de los jueces debe ser transparente y que el tribunal supremo “participar en el debate democrático de la sociedad para aumentar el conocimiento acerca de los problemas de justicia en el estado de derecho” y ha subrayado la importancia

de la relación entre el poder judicial y la prensa en relación con el papel educativo del tribunal supremo en una democracia.

Observando que el principio de transparencia es un elemento fundamental del poder judicial en un Estado basado en los derechos humanos y el Estado de Derecho y debe abordarse de manera integral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a petición del Tribunal de Casación turco, ha comenzado a trabajar en la preparación de un proyecto de declaración sobre la transparencia en el poder judicial en los primeros meses de 2013. El proyecto preparado por el Coordinador del Grupo de Transparencia Judicial de las Naciones Unidas inicialmente se ha presentado a la evaluación de los Presidentes de Tribunales Supremos de la Región Asia-Pacífica y se ha redactado según los comentarios e ideas de este órgano.

La Conferencia de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Región Asia-Pacífico

Por invitación del Presidente del Tribunal de Casación de la República de Turquía y el Representante Residente de la Oficina de Turquía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los Presidentes y/o Jueces de los Tribunales Supremos de 12 países de la Región Asia-Pacífica y los jefes de departamento del Tribunal de Casación de la República de Turquía se han reunido en Noviembre 2013 en el Palacio Çırağan en Estambul para identificar los componentes principales multidimensionales del concepto de transparencia judicial y evaluar la preparación de una declaración detallada sobre la transparencia judicial con el fin de compartir experiencia e información sobre las mejores prácticas y lecciones en el tema de garantizar la transparencia judicial. Cuatro expertos seleccionados de los otros tres países de la región los apoyaron como moderadores.

Los Presidentes de Tribunales Supremos y Jueces Supremos que participaron: **Abdul Salam Azimi**, Presidente del Tribunal Supremo de Afghanistan; **Ramiz Rzayev**, Presidente del Tribunal Supremo de Azerbaiyán; **Farid Madatli**, Presidente del Departamento de Relaciones Internacionales del Tribunal Supremo de Azerbaiyán; **Hassan Arif Sheikh**, Miembro del Tribunal Supremo de Bangladesh; **Konstantin Kublashvili**, Presidente del Tribunal Supremo de Georgia; **Vasil Mshvenierdze**, Presidente del Tribunal Federal de Mtskheta Georgia; **Rocky Panjaitan**, Miembro del Tribunal Supremo de la República de Indonesia; **Feruze Zulumbekovna Djamasheva**, Presidente del Tribunal Supremo de Kirguistán; **Tun Arifin Bin Zakaria**, Presidente del Tribunal Supremo de

Malasia; **Mohd Aizuddin bin Zolkeply**, Presidente del Departamento de Relaciones Internacionales del Tribunal Supremo de Malasia; **Gotovdorj Tsagaantsooj**, Vicejefe del Tribunal Supremo de Mongolia; **Dolgorsuren Namjil**, Presidente del Departamento de Relaciones Internacionales del Tribunal Supremo de Mongolia; **Tha Htay**, Presidente del Tribunal Supremo de Myanmar; **Damodar Prasad Sharma**, Miembro del Tribunal Supremo de Nepal; **Bharat Bahadur**, Miembro del Tribunal Supremo de Nepal; **Lohit Chandra Chah**, Miembro del Tribunal Supremo de Nepal; **Kulratna Bhurtel**, Miembro del Tribunal Supremo de Nepal; **Ramesh Prasad Rijal**, Miembro del Tribunal Supremo de Nepal; **Eakachai Chinnapongse**, Vicejefe del Tribunal Supremo de Tailandia; **Bui Ngoc Hoa**, Vicejefe del Tribunal Supremo Popular de Vietnam; **Huu Quan Tran**, Presidente del Tribunal Supremo del Estado de Ha Nam de Vietnam; **Chu Trung Dung**, Presidente del Departamento de Cooperación Internacional del Tribunal Supremo Popular de Vietnam y **Han Tuan Hiep**, Presidente del Departamento de Relaciones Internacionales del Tribunal Supremo Popular de Vietnam.

Expertos que asumieron la misión de moderación: **Juez Supremo John Dowd**, vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra (Australia); **Malathi Das**, Presidente de la Unión Asia-Pacífica de los Colegios de Abogados (Singapur); **Dato' Param Kumaraswamy**, Antiguo Reportero Especial de las Naciones Unidas Independencia de Jueces y Abogados (Malasia) y **Nihal Jayawickrama**, Coordinador del Grupo de Honestidad en la Judicatura de las Naciones Unidas (Sri Lanka).

Gabriela Knaul, Reportera Especial de las Naciones Unidas Independencia de Jueces y Abogados, en su intervención en la sesión de apertura de la conferencia ha expresado que el resultado previsto de la reunión, una declaración exhaustiva sobre la transparencia en el poder judicial supondría una valiosa contribución a las iniciativas de reforma judicial que se están llevando a cabo en algunos sistemas judiciales de todo el mundo.

Al final de la conferencia de tres días, los participantes adoptaron La Declaración de Estambul sobre la Transparencia en el Poder Judicial. La Declaración de Estambul ha sido la primera declaración amplia que consiste en los principios relativos a la transparencia en la administración de justicia.

La Conferencia de Presidentes de Tribunales Supremos de la Región de los Balcanes

En la conferencia de tres días que se ha convocado en el mes de junio del 2016 en Bursa, la primera capital del Imperio Otomano, la Declaración de Estambul sobre la Transparencia Judicial se ha presentado, revisado y adoptado sin cambios.

Los Presidentes de Tribunales Supremos y Jueces Supremos que participaron: **Xhezair Zaganjori**, Presidente del Tribunal Supremo de Albania; **Charalambos Macheras**, Miembro del Tribunal Supremo de Grecia; **Fejzullah Hasani**, Presidente del Tribunal Supremo de Kosovo¹⁹; **Elena Gosheva**, Presidente del Tribunal Constitucional de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y **Vesna Medenica**, Presidente del Tribunal Supremo de Montenegro. Los participantes de la República de Turquía: **İsmail Rüştü Cirit**, Presidente del Tribunal de Casación; **Zerrin Güngör**, Presidente del Consejo de Estado; **Abdullah Arslan**, Presidente del Tribunal Administrativo Militar Supremo y **Ahmet Zeki Liman**, Presidente del Tribunal Militar de Casación. Expertos que asumieron la misión de moderación: **Dato' Param Cumaraswamy**, Antiguo Reportero Especial de las Naciones Unidas Independencia de Jueces y Abogados (Malasia) y **Nihal Jayawickrama**, Coordinador del Grupo de Honestidad en la Judicatura de las Naciones Unidas (Sri Lanka).

Reunión del Grupo Internacional de Expertos

En octubre 2017, se ha realizado una reunión de un grupo internacional de expertos en Ankara a fin de preparar un *Proyecto de Plan de Acción para la Implementación de la Declaración de Estambul sobre la Transparencia Judicial*. Los expertos que participaron en la reunión: **Juez Supremo John Dowd** (Australia); **Juez Supremo Shiranee Tilakawardane** (Sri Lanka); **Juez Supremo Kassim Zannah** (Nigeria); **Jeffrey A. Apperson** (Estados Unidos); **Michael Buenger** (Estados Unidos); **Wojciech Postulski** (Polonia) y **Nihal Jayawickrama** (Sri Lanka). Participantes del Tribunal Supremo de Casación: **İsmail Rüştü Cirit**, Presidente del Tribunal de Casación; **Fahri Akçin**, Jefe del Departamento; **Ahmet Er**, Jefe del Departamento; **Seracettin Göktaş**, Jefe del Departamento y **Mustafa Saldırım**, Vice Secretario General. Después de la reunión, se ha desarrollado un borrador

¹⁹ La referencia a Kosovo se debe interpretar en el marco de la Decisión del Consejo de Seguridad número 1244 (1999).

del Plan de Acción. El borrador final del documento se ha presentado por **Don İsmail Rüştü Cirit**, Presidente del Tribunal de Casación en la Sesión Inicial de Nivel Alto de la Red Mundial de Integridad Judicial convocada en Abril 2018 en Viena y el texto se ha distribuido a todos los participantes.

Conferencia Final de los Presidentes de Tribunales Supremos de América del Sur y del Norte, el Caribe, Europa, África, Asia y Pacífica

Por invitación de **İsmail Rüştü Cirit**, Presidente del Tribunal de Casación de la República de Turquía e **Irena Vojackova-Sollorano**, la Representante Residente de Turquía del PNUD, los Presidentes de Tribunales Supremos y Jueces Supremos de treinta países de cinco continentes y los Jefes de Departamento del Tribunal de Casación de la República de Turquía, representantes de instituciones internacionales, regionales y nacionales se han reunido en Octubre 2018 en Estambul para revisar y adoptar *Las Medidas para la Implementación Efectiva de la Declaración de Estambul*.

Los Presidentes de Tribunales Supremos y Jueces Supremos que participaron: **Said Yousuf Halem**, Presidente del Tribunal Supremo de Afganistán; **John Dowd**, Juez Supremo Jubilado del Tribunal Supremo de Australia-Nueva Gales del Sur; **Gerhard Kuras**, Presidente de la Octava Cámara Civil del Tribunal Supremo de Australia; **Ramiz Rzayev**, Presidente del Tribunal Supremo de Azerbaiyán; **Syed Mahmud Hossein**, Presidente del Tribunal Supremo de Bangladesh; **Md Zakir Hossain**, Juez Supremo del Tribunal Regional de Bangladesh; **Ria Mortier**, Fiscal jefe del Tribunal Supremo de Bélgica; **Kenneth A. Benjamin**, Presidente del Tribunal Supremo de Belice; **Sandra Oxner**, Juez Supremo Jubilada y Presidente Fundador, Instituto de Educación Judicial de la Mancomunidad de Naciones, Canadá; **Maricela Sosa Ravelo**, Vicejefe del Tribunal Supremo Popular de Cuba; **Vasil Roinishvili**, Vicepresidente del Tribunal Supremo de Georgia; **Arun Kumar Mishra**, Juez Supremo del Tribunal Supremo de India; **Peter Charleton**, Juez Supremo del Tribunal Supremo de Irlanda; **Madiyar Balken**, Juez Supremo del Tribunal Supremo de Kazajstán; **Enock Chacha Mwita**, Juez Supremo del Tribunal Supremo de Kenia; **Melis Tagaev**, Presidente del Tribunal Regional de Issyk-Kol Kirguistán; **Jean Daoud Fahed**, Primer Presidente del Tribunal de Casación de Líbano; **Atartsetseg Lkhundev**, Juez Supremo del Tribunal Supremo de Mongolia; **Essaid Saadaoui**, Presidente del Departamento de Comercio del Tribunal de Casación de Marruecos; **Malika Ibnou Zahir**, Presidente del Departamento de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal de Casación de Marruecos; **Myint Thein**, Juez Supremo del Tribunal Supremo

de la Región Magwe de Myanmar; **Anil Kumar Sinha**, Juez Supremo del Tribunal Supremo de Nepal; **Kashim Zannah**, Presidente del Tribunal Supremo del Estado de Borno de Nigeria; **Masoud Mohamed Alameri**, Presidente del Tribunal Supremo y Presidente del Consejo Supremo Judicial de Qatar; **Shiranee Tilakawardane**, Juez Supremo Jubilado del Tribunal Supremo de Sri Lanka; **Haider Ahmad Daffalla**, Presidente del Tribunal Supremo de Sudán; **Mohamed Ahmed Ibrahim Hussein**, Juez Supremo de Sudán; **Badereldien Mohamed Ahmed Nimir**, Juez Supremo y Vicedirector de la Presidencia del Tribunal Supremo de Sudán; **Gulzor Mukhabbat**, Juez Supremo del Tribunal Constitucional de Tayikistán; **Slaikate Wattanapan**, Vicepresidente del Tribunal Supremo de Tailandia; **Zerrin Güngör**, Presidente del Consejo de Estado de la República de Turquía; **Engin Yıldırım**, Vicepresidente del Tribunal Constitucional de la República de Turquía; **Richard G. Stearns**, Juez Supremo, Comité de Asuntos Judiciales Relaciones Internacionales Judiciales de los Estados Unidos; **Mumin Karimoviç Astanov**, Vicepresidente de Asuntos Administrativos del Tribunal Supremo de Uzbekistán y **Maikel Jose Moreno Perez**, Presidente del Tribunal Supremo de Venezuela.

Los Jefes del Departamento y Jueces Supremos de la Presidencia del Tribunal de Casación de la República de Turquía que participaron: İsmail Rüştü Cirit, Presidente del Tribunal de Casación de la República de Turquía; **Mehmet Akarca**, Fiscal General del Tribunal de Casación; **Abdulhalik Yıldız**, Primer Vicepresidente del Tribunal de Casación; **Ahmet Özgan**, Jefe de la 11ª Cámara Civil; **Hüseyin Eken**, Jefe de la 11ª Cámara Penal; **Erdoğan Buyurgan**, Jefe de la 5ª Cámara Civil; **H. Nesrin Yılmazcan**, Jefe de la 14ª Cámara Civil; **Muammer Öztürk**, Jefe de la 15ª Cámara Civil; Ömer Uğur Gençcan, Jefe de la 2ª Cámara Civil; **A. Şahabattin Sertkaya**, Jefe de la 17ª Cámara Civil; **Erkan Öztürk**, Jefe de la 6ª Cámara Penal; İbrahim Şahbaz, Jefe de la 4ª Cámara Penal; **Haydar Metiner**, Jefe de la 8ª Cámara Penal; **Sadık Demircioğlu**, Jefe de la 4ª Cámara Civil; **Ramazan Özkepir**, Jefe de la 19ª Cámara Penal; **Ali Seçkin Togay**, Jefe de la 1ª Cámara Civil; İlmettin Köklü, Jefe de la 20ª Cámara Penal; **Mustafa Şahin**, Jefe de la 1ª Cámara Penal; **Methiye Şebnem Günaydın**, Jefe de la 3ª Cámara Penal; **Hüsnü Uğurlu**, Jefe de la 10ª Cámara Penal; **Mehmet Çamur**, Jefe de la 9ª Cámara Civil; **Fahri Akçin**, Jefe de la 8ª Cámara Civil; **Mete Duman**, Jefe de la 3ª Cámara Civil; **Mehmet Berber**, Jefe de la 15ª Cámara Penal; Şakir Aktı, Jefe de la 5ª Cámara Penal; **Faruk Gök**, Jefe de la 23ª Cámara Civil; **Burhan Karaloğlu**, Jefe de la 9ª Cámara Penal; **Vuslat Dirim**, Jefe

de la 13ª Cámara Penal; **Ahmet Er**, Jefe de la 12ª Cámara Penal; **Mustafa Kemal Semercioglu**, Jefe de la 17ª Cámara Penal; **Halil Özdemir**, Jefe de la 10ª Cámara Civil; **Seracettin Göktaş**, Jefe de la 22ª Cámara Civil; **Eyüp Yeşil**, Jefe de la 16ª Cámara Penal; **Ali Selman Erkuş**, Jefe de la 13ª Cámara Civil; **Ayhan Tuncal**, Jefe de la 12ª Cámara Civil; **Mehmet Bülent Selçuk**, Jefe de la 19ª Cámara Civil y **Haydar Sami Kuzu**, Jefe de la 2ª Cámara Penal.

Los Presidentes de Tribunales Supremos y Jueces Supremos que asistieron: **Farid Madatli**, Presidente del Departamento de Relaciones Internacionales del Tribunal Supremo de Azerbaiyán; **Luis Alberto Amorós Núñez**, Embajador de la República de Cuba; **Ahmad Alkuwari**, Subsecretario Adjunto de la Jefatura del Consejo Supremo Judicial de Qatar; **Omar Ganim Mohamed**, Director de la Sección de Cooperación Internacional del Consejo Supremo Judicial de Qatar; **Mohammed Almalki**, Presidente del Departamento de Coordinación y Persecución del Consejo Supremo Judicial de Qatar; **Komtharnongchai Chiphairojn**, Subsecretario Adjunto del Tribunal Supremo de Tailandia; **Jaiber Isaac Nunez Jimenez**, Consultor Presidencial Legal del Tribunal Supremo de Venezuela y **Julio César Zamora**, Presidente del Departamento de Información y Consultoría del Tribunal Supremo de Venezuela.

Representantes de las instituciones regionales y nacionales: **Nihal Jayawickrama**, Coordinador del Grupo de Integridad Judicial de las Naciones Unidas; **Sophio Gelashvili**, Jefe de la Sección de Reforma del Sector Judicial del Consejo Judicial Europeo; **Michael Ingledow**, Jefe de la Oficina de Programa de Ankara del Consejo Europeo; **Liviana Zorzi**, Analista de Programa, Equipo de Gobernanza y Construcción de Paz, Centro Regional de Bangkok de la PNUD y **Jeffrey Apperson**, Vicepresidente del Estados Unidos y Vicepresidente del Centro Nacional de Tribunales Estatales, Estados Unidos.

Representantes de la PNUD en Turquía: **Irena Vojackova-Sollorano**, Coordinadora Residente; **Sukhrob Khojimatov**, Vicedirector del País; **Seher Alacacı Arner**, Representante Adjunto Residente (Programa); **Sezin Üskent**, Directora de Portfolio de Gobernanza Inclusiva y Democrática; **Görkem Bağcı**, Responsable del Proyecto y **Nazlı Ersoy**, Asistente del Proyecto.

Equipo de Proyecto de la Presidencia del Tribunal de Casación de la República de Turquía: **Mustafa Saldırım**, Director del Proyecto, Juez,

Vicesecretario General; **Gülşah Sibel Akbulut**, Juez; **Gözde Hülalü**, Experta del Proyecto; Özlem **Karaman**, Coordinadora del Proyecto; **Seda Dural**, Asistente del Proyecto; **Cem Şenol**, Asistente del Proyecto; **Selma Dalkılıç**, Asistente del Proyecto y **Nihal Eriş**, Asistente del Proyecto.

En la conferencia convocada en el Hotel CVK Park Bosphorus en la fecha 11-12 de octubre de 2018, los participantes revisaron los temas siguientes acerca del Proyecto de Medidas Prácticas en dos mesas redondas simultáneas:

- (i) Juicios públicos, acceso a las instalaciones de los tribunales, acceso al sistema judicial, oportunidades de traducción, distribución de los juicios, transparencia de la realización de justicia, detenciones administrativas y publicación de las decisiones (Principios 1-8);
- (ii) Formación de los estudiantes, programas de acceso al público, relaciones con la prensa, evaluación de la satisfacción popular sobre la realización de justicia, designación de los jueces, reclamaciones contra los jueces, proceso disciplinario (Principios 9-15).

Las modificaciones recomendadas por los participantes se evaluaron en la sesión general, la última versión de las Medidas Prácticas se presentó por el moderador **Nihal Jayawickrama** y se adoptó unánimemente por aclamación.

En la tarde del 12 de octubre de 2018 en el Palacio de Dolmabahçe, *La Declaración de Estambul sobre la Transparencia Judicial y Las Medidas para la Implementación Efectiva de la Declaración de Estambul* se declararon oficialmente por el jefe del Tribunal de Casación de la República de Turquía **Don İsmail Rüştü Cirit** en la ceremonia acompañada por el Presidente de la República de Turquía Su Excelencia **Recep Tayyip Erdoğan**.

La Declaración de Estambul sobre la Transparencia en el Poder Judicial y las Medidas para la Implementación Efectiva de la Declaración de Estambul fueron proclamadas oficialmente por el Presidente del Tribunal de Casación de la República de Turquía, Sr. **İsmail Rüştü Cirit**, en una ceremonia honrada por Su Excelencia **Recep Tayyip Erdoğan**, Presidente de la República de Turquía, en el Palacio de Dolmabahçe en la tarde del 12 de octubre de 2018.

Comisión de Prevención de la Delincuencia y Justicia Penal de las Naciones Unidas (CCPCJ)

En mayo 2019 la vigésima octava sesión de Comisión de Prevención de la Delincuencia y Justicia Penal de las Naciones Unidas (CCPCJ) ha

convocado en Viena y se ha recomendado unánimemente la adopción por el Consejo Económico y Social (CES) del proyecto de resolución titulado “Incrementar la transparencia en el poder judicial” (E/CN.15/2019/L.12/Rev.1) presentado por la República de Turquía. El proyecto de resolución, a parte de otros temas:

- (a) Tiene en cuenta los principios creados para garantizar la transparencia judicial y los esfuerzos conjuntos de los presidentes de tribunales y jueces altos de 37 países que han formulado las medidas para la implementación efectiva de estos principios durante un trabajo de seis años;
- (b) Toma nota de que la Declaración de Estambul sobre la Transparencia Judicial y las Medidas para la Implementación Efectiva de la Declaración de Estambul aspiran a aumentar y fortalecer la confianza pública al derecho de un juicio justo proporcionado por un tribunal legal, competente, independiente e imparcial; e
- (c) Invita a los estados miembros a considerar todas las prácticas y todos los documentos buenos, incluido La Declaración de Estambul sobre la Transparencia Judicial conforme a sus marcos legales domésticos y sus obligaciones internacionales cuando formulen sus propios programas y reformas legales sobre la administración de justicia.

El equipo del Proyecto de Ética, Transparencia y Confianza del Tribunal de Casación que participó en la sesión de dos semanas de la CCPCJ que incluye reuniones formales e informales en Viena: **Mustafa Saldırım**, Vicesecretario General del Tribunal de Casación y Director del Proyecto; **Gözde Hülagü**, Experta Alta del Proyecto y **Nihal Eriş**, Experta del Proyecto. Participantes del Ministerio de Relaciones Exteriores: **Ahmet Muhtar Gün**, Embajador de la Representación Permanente de la República de Turquía ante la Oficina de Viena de las Naciones Unidas; **Cenk Ünal**, Embajador Adjunto y **Hüseyin Hançer**, Subsecretario.

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (CES)

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (CES) adoptó la resolución E/RES/2019/22 titulada “Incrementar transparencia en el poder judicial” sin votación en la fecha 23 de Julio de 2019.

